

## **Las derechas en México: entre la moderación y la polarización**

**Francisco Reveles Vázquez<sup>1</sup>**

### **Introducción**

La llegada al poder de fuerzas políticas de izquierda en América Latina trajo consigo una serie de expectativas para los grupos subalternos, por lo general distanciados de los gobernantes y hasta confrontados con ellos. De hecho, la separación entre estado y sociedad fue un fenómeno de mucha vigencia para quienes eran partidarios de las corrientes ideológicas propias del marxismo, el comunismo, el socialismo y algunas de carácter socialdemócrata. Por su lado, las dictaduras militares, cuando no las eliminaron o prohibieron, colocaron de espaldas a la pared a las organizaciones de la sociedad civil. Con los procesos de democratización, los ciudadanos volvieron a ocupar las calles para manifestarse en contra de gobiernos, políticas o acciones institucionales lesivas para sus intereses o para exigir respuesta a sus demandas. Y también, con el tiempo, nuevos actores comenzaron a ocupar las calles para protestar contra distintas decisiones o comportamientos de los gobiernos de izquierda o progresistas. Actores otrora privilegiados por las élites políticas, insatisfechos o afectados por las decisiones de los gobiernos que ahora atendían primordialmente a los olvidados por los gobiernos de la postransición, se movilizaron, crearon o apoyaron a nuevos partidos, abanderados por líderes que llegaron a usar un discurso antisistema. Fue entonces cuando la derecha se volvió rebelde (Stefanoni, 2022). La polarización llegó para quedarse debido a la ausencia de bienestar social generalizado y por la debilidad y desconfianza de las instituciones clave de la forma de gobierno democrática.

En México, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador caracteriza a sus opositores como “los conservadores”. El término pretende rememorar a las

---

<sup>1</sup> Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investigador Nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT. Ha publicado diversos trabajos sobre partidos políticos, gobiernos y democracia en México y América Latina. Sus publicaciones más recientes son: “Gobiernos y democracia en América Latina: problemas de representación política en las democracias realmente existentes”, “Gobiernos y democracia en América Latina: ¿en la búsqueda de la igualdad social?” y “Gobiernos de izquierda y democracia en América Latina: participación, conflicto y confrontación”, todos ellos publicados por la UNAM y editorial Teseo en los últimos tres años. Agradezco la colaboración de Raúl Uriel Carbente Tezoquipa, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la FCPS de la UNAM, en la recolección de la información necesaria para la elaboración de este trabajo.

facciones políticas contrarias a otras transformaciones históricas, como la Independencia, la Reforma y la Revolución. No es gratuito que su gobierno se autodenomine como de la “Cuarta Transformación”. De modo que los conservadores son todos aquellos opuestos a los “transformadores” del gobierno actual. El contenido ideológico no es acentuado, pero está presente en esta esquemática clasificación de los contendientes en la política.

Con base en estos términos, con frecuencia se equipara a los conservadores con la derecha y a la izquierda con los transformadores. Como se sabe, las ideologías cambian con el tiempo y el contexto, y el gobierno mexicano actual se autodefine como contrapuesto a los que él mismo define como “neoliberales”. La 4T se caracteriza por la realización de cambios que se pretenden radicales, a partir de una crítica implacable a los presidentes del periodo 1988-2018 (es decir, los emanados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional). El gobierno en funciones reivindica la función social del estado al ampliar las políticas sociales consistentes en transferencias económicas directas. Rompió con diferentes cánones de política económica neoliberal, principalmente en lo que se refiere a la política salarial, donde estableció considerables incrementos que redundaron en un incipiente pero real incremento al poder adquisitivo de millones de trabajadores. Está construyendo grandes obras de infraestructura con la finalidad de dar sustento a un inaplazable crecimiento económico. Forzado por la pandemia, buscó fortalecer un sistema de salud de suyo endeble, mientras que la educación quedó a la deriva, con un proyecto nuevo que arrancó apenas en el cuarto año del sexenio. En materia de derechos sociales, el avance fue sustancial, pero la democracia sindical ha quedado solamente en las leyes y los trabajadores no cuentan con líderes y organizaciones que los representen. Asimismo, la extensa cantidad de empleos informales implica la cancelación o limitación de derechos para millones de trabajadores (ya que la mayoría de la población económicamente activa es informal).

El discurso presidencial estimula la polarización al evitar debatir, repensar, reflexionar, retractarse o reconocer equivocaciones en el ejercicio del poder. Por el contrario, cualquier crítica es descalificada y sus emisores son vistos como enemigos. La intolerancia inhibe la libertad de expresión y, en el fondo, niega el pluralismo, ambos elementos sustanciales de la forma de gobierno democrática.

El presidente ha puesto el acento en varios aspectos de su gestión para deslindarse del pasado neoliberal y poner en relieve sus propias cualidades. Sin embargo, a pesar de su

reiterada frase de “no somos iguales” (a los gobernantes que le antecedieron) hay características importantes de sus políticas y de los personajes que integran la administración de la 4T que más bien tienen actitudes “conservadoras”, en otros términos, que reproducen prácticas autoritarias o de corte neoliberal, lo que contradice la postura de izquierda del presidente. Actitudes habituales en el pasado y que no por tanto representan cambios en el comportamiento de las élites ni un programa de gobierno cualitativamente diferente. Cualquier crítica hacia este comportamiento detona la polarización, donde ya no solamente participa el gobierno sino también la oposición.

Para comprender este fenómeno en nuestro país, exponemos algunos elementos sustanciales para comprender en particular el surgimiento de corrientes ideológicas de derecha, donde despuntan las neoconservadoras y sus principales liderazgos. Después nos abocamos al caso de México, donde exponemos los rasgos principales de conservadurismo que el presidente y su gobierno han expresado en diferentes planos: señalamos sus posiciones respecto del modelo económico, que sigue una lógica capitalista; en materia de régimen político, despunta su preferencia por la concentración del poder en la figura presidencial; también tratamos la persistencia de prácticas poco o nada democráticas de parte de las élites, como la corrupción y el disfrute de privilegios; la nueva moral que se pretende socializar desde el gobierno; y la amenaza de la militarización a partir del fortalecimiento de las funciones de las fuerzas armadas.

### **El contexto político del ascenso de las derechas**

La sociedad civil debió reconstituirse y volver a tejer redes de participación, mediante las cuales demandar o enfrentar a los nuevos gobiernos. La democracia posibilitó su expresión, pero las respuestas institucionales no necesariamente fueron adecuadas. Por ello las luchas continuaron como en el pasado. En otros casos, hubo nuevas necesidades y problemas que generaron demandas de nuevo cuño, en el marco de procesos de consolidación democrática.

Los primeros gobiernos civiles fueron beneficiados por las grandes expectativas de la democracia: competencia pacífica por el poder, mejora de la condición de vida de los ciudadanos y posibilidad de mayor participación en la toma de decisiones. Con el transcurso del tiempo, aunque los gobernantes fueron electos por la ciudadanía, prevaleció la frustración

debido a su desinterés o incapacidad por responder a los apremios sociales y también porque les correspondió instrumentar un programa económico definido desde el exterior, basado en el respeto a las leyes de los mercados internacionales. Los ejemplos más claros fueron los de Chile y Argentina. A la desilusión también contribuyó la debilidad de las instituciones, la falta de experiencia o de convicción por la democracia entre las élites y, en algunos casos, la ineptitud de los tomadores de decisiones elegidos por el voto de los electores (como sucedió en países donde privó la inestabilidad política, como en Ecuador o Bolivia).

Los gobiernos partidarios del neoliberalismo no tuvieron mayores complicaciones para la aplicación de medidas que se suponía garantizarían el crecimiento. Y aquellos que en principio eran críticos del capitalismo, al llegar al poder se vieron constreñidos a adoptar el mismo modelo (el justicialista Carlos Menem abdicó de su postura izquierdista para instrumentar el modelo neoliberal). La multiplicación de éxitos electorales de fuerzas de izquierda a principios del siglo XXI hizo pensar en cambios de fondo (el llamado giro a la izquierda). Pero las fuerzas de derecha no se quedaron cruzadas de brazos. Al contrario, ante la “marea rosa”, surgieron agrupaciones, liderazgos, militantes y simpatizantes con ideas distintas, que pugnaban no necesariamente por el neoliberalismo, sino por medidas de gobierno que no significaran un riesgo para sus intereses ni una alta conflictividad social (Jáuregui y Arequipa, 2021).

La sociedad civil se fue expandiendo y diversificando a partir del desarrollo mismo de la gestión de los gobiernos progresistas. Una de sus debilidades fue la falta de una base social de apoyo organizada, estable y cohesionada. Los progresismos estuvieron convencidos de ser los portadores del bienestar social y confiaron en la infalibilidad de sus liderazgos, más que en la conformación de una organización u organizaciones sólidas para la perdurabilidad de su proyecto político. Olvidaron que el peso contundente del corporativismo en algunos países, de suyo, marcó una impronta autoritaria en la cultura política, impidió la democratización de múltiples organizaciones maniatadas por el estado y lesionó los intereses de los trabajadores. En ellos la acción social fue avanzando con dificultad, y las corrientes de izquierda poco pudieron hacer para insertarse en las principales agrupaciones de trabajadores. Eso dio pie a que las arengas de otros grupos, la propaganda mediática o la influencia de organizaciones confesionales tuviera influencia entre ellos y en la ciudadanía, con lo que magnificaron los problemas económicos, los yerros u omisiones de los gobernantes. Las

derechas aprovecharon las fisuras de la autoridad del progresismo, las reglas de la rendición de cuentas y los espacios de participación para la confrontación política.

Las protestas de organizaciones y movimientos sociales adquirieron fuerza ante la incapacidad gubernamental para enfrentar los negativos efectos de crisis económicas internacionales. En unos cuantos países, la acción de élites políticas y económicas neoconservadoras impulsaron movilizaciones que destronaron presidentes que parecían poderosos, contando con un apoyo social indiscutible. En parte por la colaboración de medios de comunicación masiva y de las redes sociales digitales, pero siempre debido a la incapacidad gubernamental. A diferencia del pasado, estos actores no utilizaron una salida violenta ni promovieron la instauración de regímenes autoritarios o totalitarios. La inestabilidad política, incluso en las coyunturas más críticas, fue superada por la vía electoral y por los mecanismos legalmente establecidos.

Esta ruta seguida por las corrientes de derecha acentúa uno de los cambios más relevantes suscitados en el ámbito latinoamericano: el desplazamiento de múltiples expresiones sociales hacia el espacio electoral. La democracia ofreció una válvula de escape eficaz para la funcionalidad de los regímenes políticos. Primero para fuerzas políticas de izquierda, antisistema, revolucionarias, clandestinas y antaño limitadas a la acción social, las cuales finalmente aceptaron la vía electoral para lograr el cambio político necesario, de acuerdo con sus propias perspectivas. Posteriormente, para fuerzas políticas privilegiadas por dictaduras, gobiernos autoritarios o seudo democráticos, que vivieron afectaciones por las medidas adoptadas por los progresismos.

La aceptación de la democracia no significa que la disputa por el poder haya sido cancelada o completamente regulada. Vale la pena recordar que la democracia es una forma de gobierno y, por lo tanto, una forma de dominación. El conflicto no se cancela, la disputa por el poder no se diluye, sino que simplemente se regula a través de leyes, instituciones, partidos y elecciones. De modo que cualquier fuerza política que se proponga la conquista del poder tiene derecho hacerlo en el marco de las reglas que la democracia impone. Pero, como se sabe, las reglas pueden ser respetadas o no; máxime cuando se trata de una pugna por el poder político (cuyo ejercicio implica precisamente eliminar o cambiar las reglas). El problema que tienen es que, a diferencia de los regímenes autoritarios o totalitarios, la conformación de un gobierno democrático debe gozar de legitimidad. Y ello solamente se lo

da, inicialmente, un respaldo amplio de la de sociedad mediante su voto. No basta ni una amplia movilización social, ni un aparato militar, ni un liderazgo fascinante y ni siquiera el apoyo estadounidense; es preciso que los gobernantes obtengan además una legitimidad en las urnas. Hoy este es el recurso predominante, incluso para gobiernos que siguen efectuando elecciones pese a su talante autoritario (como sucede en Nicaragua).

Pese a sus virtudes, la democracia no dejó contentos a todos. Varios gobiernos progresistas entraron en declive presa del deterioro económico (con el consecuente disgusto de las clases medias). A la explotación social de los trabajadores se agregó una profundización de la desigualdad social, en la que la pobreza y la marginación fueron padecidas por un mayor número de personas. El cambio progresista no trajo consigo una bonanza económica permanente que resolviera las necesidades sociales más apremiantes. Las castigadas clases medias reaccionaron positivamente a las convocatorias de actores políticos neoconservadores, también disgustados con las políticas gubernamentales.

Si al principio de la democratización las organizaciones y movimientos sociales cedieron protagonismo a las agrupaciones electorales, posteriormente entre éstas también despuntaron las que adoptaron identidades ideológicas de derecha.

La lucha social en el ámbito laboral se topó contra una restrictiva política de tope salarial, donde ningún sector podía tener un ingreso más allá del índice inflacionario. Los sindicatos perdieron fuerza por la aplicación de nuevas fórmulas de negociación de condiciones de trabajo. Hasta su existencia fue puesta en duda por leyes que “liberaron” a los trabajadores para que fueran capaces de negociar individualmente las condiciones de su contratación laboral. El sindicalismo dio tregua momentánea a los gobiernos progresistas, entre los cuales hubo participación de representantes de sindicatos y organizaciones sociales en general. Ambos fenómenos, la persistencia de las exigencias en las calles y la presencia de trabajadores en las oficinas públicas espantaron a un empresariado que además experimentaba los estragos de la crisis económica internacional.

Las políticas de gobiernos progresistas de sobreexplotación de petróleo, hidrocarburos y minería (acordes con los requerimientos del modelo capitalista) impactaron las condiciones de trabajo y provocaron protestas y movilizaciones de sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas, populares y de pueblos afectados por grandes obras de infraestructura. Por su lado, una parte de las clases económicas dominantes también vio

lesionados sus intereses por decisiones gubernamentales en su contra (que no implicaban la expropiación o su desaparición sino la reducción de apoyos o privilegios legales o ilegales para su desenvolvimiento). Por supuesto, hubo acciones gubernamentales lesivas como la nacionalización de empresas, el incremento de impuestos, la cancelación de prebendas en materia fiscal o la eliminación de actos de corrupción de parte de funcionarios. Todo ello tuvo como consecuencia la activación de actores que salieron de su cómoda posición, impelidos por los progresismos y por la amenaza de liderazgos que percibían tendientes al autoritarismo.

La aparición de nuevos actores ubicados en el flanco ideológico de derecha se enmarcó por un conjunto de transformaciones en la cultura política, provocadas por los gobiernos neoliberales. Valores propios del estado de bienestar de corte socialdemócrata o liberal y de aquellos que predominaron en los países socialistas se perdieron, y en su lugar se estableció un individualismo a ultranza, en el que cada persona debía preocuparse y trabajar para su propio beneficio. El progreso individual se impuso como aspiración primordial. En los países con un desarrollo elevado, las personas también optaron por la búsqueda de más beneficios individuales y de bienes materiales. Adquisición de propiedades como aparatos electrodomésticos, automóviles, vestuario de moda, compra de más de una vivienda, adornos para viviendas, recursos para el disfrute de tiempo libre y educación de “calidad” (aunque fuese pagada), fueron comportamientos usuales, con lo que la desigualdad se incrementó. Algunos cambios pasaron desapercibidos porque fueron vistos como parte del contexto, propios de la renovación generacional, de un proceso de transformación social natural. En efecto, hubo una combinación de todos estos factores, pero sin duda las políticas económicas impulsadas desde el poder calaron hondo en el comportamiento de las personas. Y al llegar los progresismos, varios de ellos descartaron (u olvidaron) la transformación de estos valores, por lo que se preservaron y resurgieron ante los llamados de las nuevas fuerzas opositoras de derecha.

La década perdida no solamente lo fue en la dimensión económica, sino también en el ámbito de la participación social. El declive de la tradicional acción de sindicatos y organizaciones campesinas y populares fue la resultante natural del modelo de desarrollo capitalista (ya para los noventa, el único existe en el mundo) y de respuestas insatisfactorias de los gobiernos progresistas. El espacio social fue ocupado por nuevos actores. Al principio

fueron los indígenas quienes aparecieron en la lucha social. Más recientemente, por fuerzas de derecha entre las que están también las extremistas.

En el plano económico, el derrumbe del socialismo real trajo consigo la hegemonía del capitalismo. No había más opciones, de modo que las organizaciones también abjuraron del comunismo como utopía a alcanzar, desechando el concepto en sus discursos y, en su caso, en el programa de gobierno. Las fuerzas de izquierda que arribaron al poder mediante elecciones, particularmente en el ámbito local, se olvidaron de los preceptos socialistas o comunistas. Solamente unos cuantos países con gobiernos con esta identidad sobrevivieron. En el espacio latinoamericano, Cuba subsistió no sin dejar de experimentar un controlado proceso de cambio de futuro todavía incierto. Comunismo y socialismo tradicionales desaparecieron del ideario de casi todas las izquierdas, las cuales además no adquirieron una identidad plenamente identificable. Tardaron mucho en ofrecer nuevas y originales ideas para los pueblos y para los gobiernos.

En el otro lado, la irrupción de las izquierdas en el gobierno no debilitó a los de otras naciones donde el modelo neoliberal se mantuvo vigente, como en México, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Chile. Diferentes partidos continuaron con el modelo neoliberal, superando protestas sociales que pugnaban por un cambio. Las diferencias entre las derechas afloraron particularmente por la amenaza que representaban varias de las políticas de los gobiernos de izquierda. Los estallidos sociales entre 2018 y 2019 en Nicaragua y Chile, por ejemplo, reactivaron el activismo de las derechas para enfrentar a la disidencia o para reclamar y acceder al poder directamente, como ocurrió con el ascenso de Jair Bolsonaro o Nagib Bukele a las presidencias de Brasil o El Salvador, quienes desplazaron no sólo a las izquierdas progresistas sino a las derechas moderadas. Era su oportunidad de demostrar que su alternativa era mejor que las otras. En realidad, pronto demostraron que su neoconservadurismo no auguraba nada positivo para amplios sectores de la sociedad, que el cambio en las condiciones de vida persistiría y que (una vez más) la democracia sería cuestionada. Ya no por los militares o por una intervención extranjera directa, sino por decisiones de los propios gobernantes, animados por valores de corte neoconservador.

### **Rasgos conservadores del gobierno de la Cuarta Transformación**



Definido de manera básica, el conservadurismo está constituido por “ideas y actitudes que apuntan al mantenimiento del sistema político existente y de sus modalidades de funcionamiento, y se ubican como contrapartida de las fuerzas opositoras” (Bobbio y Mateucci, 1988). En su ideario sobresalen el orden, la tradición, la jerarquía, el individuo, la familia, la nación y la idea de dios. El respeto a la norma llega a ser una prioridad, pero ni las leyes ni el ejercicio de gobierno pueden pasar por encima del interés individual. Recientemente, a finales del siglo XX y principios del XXI, las corrientes neoconservadoras han avanzado significativamente en muchas regiones del mundo. En Europa, de acuerdo con Ramírez de Garay (2008), tales corrientes se caracterizan más por un fuerte sentido de grupo que por asumir una postura individualista; ese sentido son mucho más incisivas en sus cuestionamientos a “agentes externos”, es decir, contra los migrantes; también sostienen una postura antiparlamentarista, para nada liberal, y un férreo antielitismo; el orden moral basta para hacer un buen gobierno, por lo que sus críticas a la corrupción son acendradas; convocan a la ciudadanía a la responsabilidad, a la justicia social, a la solidaridad y al autosacrificio en beneficio de todos; también sostienen una postura antimaterialista mediante valores universales, lo cual le da a las personas la suficiente autoridad moral para tomar decisiones políticas o para demandarlas a los gobernantes; los conservadores abrazaron una postura anticomunista frente al regreso de fuerzas políticas de izquierda; y algunos de sus conspicuos representantes fueron líderes que hablaron a nombre del pueblo (Ramírez de Garay, 2008: 289).

Como es evidente en 2022, el neoconservadurismo ha avanzado de manera notable en muchos lugares del mundo. Se compone de valores y prácticas que sostienen personas, líderes políticos, organizaciones civiles, grupos de interés, intelectuales, partidos, medios de comunicación, gobiernos o agentes políticos internacionales. En México, el conservadurismo no sólo se halla en la oposición sino en el propio gobierno. Por ello, en este artículo tratamos de encontrar el conservadurismo en el gobierno de la Cuarta Transformación.

### **El conservadurismo en la dimensión económica**

De entrada, la identidad ideológica de izquierda se ha puesto en cuestión debido a la persistencia del capitalismo como modelo económico a seguir. Como ha señalado Bolívar, la

4T es antineoliberal pero no anticapitalista (Bolívar, 2019). Nada raro, si se revisan las posiciones de la mayoría de múltiples organizaciones izquierdistas que no atinan aun a formular un proyecto completamente alternativo al capitalismo. Y sin embargo, existen incipientes corrientes ideológicas en el ámbito latinoamericano, como el socialismo del siglo XXI, el estado plurinacional, la revolución ciudadana, la política del vivir bien o inclusive el socialismo cubano (que está en un proceso de actualización sin renunciar a sus orígenes). Es de llamar la atención que ninguna de estas identidades ideológicas sea reivindicada por el gobierno mexicano, aunque tenga varias afinidades (con lo que se ha denominado como “neodesarrollismo”) (Araníbar y Rodríguez, 2013).

En contraposición a estas corrientes, López Obrador entabló buenas relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, del Partido Republicano. La política anti-inmigrante del vecino del norte nunca encontró una respuesta nacionalista a ultranza del gobierno mexicano, ni del presidente, ni del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Más bien, México se ajustó a las directrices decretadas por Estados Unidos para contrarrestar el flujo migratorio, no sólo a los connacionales sino también a las personas provenientes de Centroamérica, que se encontraron con una política de contención del ejército mexicano que lindó con la represión. Frente a las políticas de Trump (ultraconservadoras), el presidente López Obrador optó por callar, supuestamente con base en una política de no intervención, basada en el respeto irrestricto a la soberanía de cada nación. Aunque esa nación tuviera a la cabeza a un populista de ultraderecha.

Las relaciones México-EU no cambiaron de manera notable con la alternancia en la presidencia estadounidense. Curiosamente, López Obrador guardó distancia con el nuevo presidente Joe Biden, del Partido Demócrata, a quien incluso regateó el reconocimiento de su victoria electoral, haciendo eco de las impugnaciones de Trump (que buscaba reelegirse a toda costa, volviendo a afectar la credibilidad del sistema electoral de su país). Fue un alivio para el gobierno de la 4T que Biden se alejara de las posiciones más radicales de su antecesor, facilitando el sostenimiento de una política mexicana favorable a Estados Unidos. Aunque ocasionalmente López Obrador ha convocado a la integración latinoamericana, no es antiimperialista más allá del discurso.

La conservación del modelo económico por parte de López Obrador le hizo tejer una relación armónica con las principales facciones del empresariado mexicano. Es conocido que

desde su gestión al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006) entabló vínculos provechosos con Carlos Slim, uno de los más grandes multimillonarios del mundo. También ha entablado buenas relaciones con el propietario de TV Azteca, una de las dos más grandes empresas de medios en el país.<sup>2</sup> Asimismo, Alfonso Romo Garza, un importante empresario con ideología de derecha<sup>3</sup> recibió la encomienda de “coordinar el Proyecto de Nación 2018-2024 propuesto por Andrés Manuel López Obrador, así como ser el Coordinador de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil durante la campaña presidencial. El 1 de diciembre de 2018 ... López Obrador nombró a Alfonso Romo Garza como Jefe de la Oficina de la Presidencia. En febrero de 2019, recibió del Presidente el nombramiento para presidir el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. El objetivo de este nuevo organismo (fue) promover la inversión y consolidar los esfuerzos entre todos los actores de desarrollo para apoyar proyectos que permitan al país crecer con una tasa superior a la registrada en las últimas décadas” (López Obrador, 2022). En tal organismo participa el llamado Consejo Asesor Empresarial de la presidencia, donde sobresalen los propietarios de los consorcios de medios de comunicación, TV Azteca y TELEVISIA, así como el de BANORTE.<sup>4</sup>

Esto explica, en parte, que estos medios no sean sus detractores. En efecto, hay comunicadores que en lo personal han enarbolado una visión crítica y de hecho hacen política contra la 4T (Carlos Loret de Mola es el ejemplo más claro, pero incluso él dejó su noticiero diario en el canal más visto de la TV). Pero el presidente no desaprovecha la ocasión para

---

<sup>2</sup> Estos son los multimillonarios que más contratos tuvieron en la primera mitad del sexenio: mil 155 contratos para Slim, por un monto total de 14 mil 449.4 millones de pesos y 34 contratos para Salinas por 3mil 781.8 millones de pesos. Llama la atención que casi el 63 por ciento de los contratos para el primero fueran por adjudicación directa. Y en el caso del segundo, el 44%. (La silla rota, 26 de octubre de 2021). No está demás señalar que el consorcio televisivo se encargó del programa “Aprendiendo en casa”, el recurso digital utilizado por la Secretaría de Educación Pública para las clases virtuales durante dos años de restricción social por la pandemia. Y también es preciso señalar que una empresa de Slim está construyendo el segundo tramo del tren maya, 172 km que van de Escárcega, Campeche, a Calkini, Yucatán, con un costo de 18 mil 553 millones de pesos (Expansión, 19 de abril de 2021).

<sup>3</sup> El primer secretario de Hacienda de AMLO, Carlos Urzúa, renunció a su cargo por diferencias con él. Lo calificó como un “hombre de extrema derecha” y en una entrevista inquirió “¿Cómo un hombre así, que llegó a admirar a Augusto Pinochet (dictador chileno) y a Marcial Maciel (líder de la secta Legionarios de Cristo), acabó no solo siendo amigo de López Obrador, sino incluso siendo el jefe de la Oficina de la Presidencia?” (BBC Mundo, 16 de julio de 2019).

<sup>4</sup> Además de Bernardo Gómez (TELEVISA), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) y Carlos Hank (BANORTE), en el consejo participan Olegario Vázquez Aldir (Grupo Imagen, que abarca Imagen TV y Excélsior), Daniel Chávez (Grupo Hotelero Vidanta), Miguel Alemán (Interjet), Sergio Gutiérrez (TV Azteca y DeAcero) y Miguel Rincón Arredondo (Bio Pappel). (López Obrador, 2022<sup>a</sup>).

responder y lanzar acusaciones en su contra en sus conferencias matutinas. Pese a todo, no todas las empresas asumen una postura antigubernamental como bloque. Ni éstas, ni aquellas que, en efecto, han sido lesionadas por ciertas políticas gubernamentales, como las de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, en la zona metropolitana de la CDMX, la revocación de una fábrica de cerveza en Baja California (llamada Constelations Brands), la supresión de las condonaciones de impuestos a grandes empresas o el cobro de impuestos retrasados o de adeudos por energía eléctrica para grandes consumidores.<sup>5</sup>

También llama la atención que la Secretaría de Economía esté a cargo de Tatiana Clouthier, quien militó en las filas del PAN de la mano de su padre, el empresario Manuel J. Clouthier (empresario agroindustrial quien además de ser candidato presidencial en 1988, llegó a ser dirigente del máximo organismo de la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial). Accionista de al menos dos empresas en Sinaloa (inmobiliaria Retali y consultoría CC Patrimonial), el reconocimiento de su estirpe familiar entre el empresariado es una carta de presentación que ayuda sin duda a la concreción de acuerdos con el gobierno. También refleja un alto grado de pragmatismo de parte del presidente, quien optó por pasar de tener una experta (Graciela Márquez Colín) a una persona con escasa especialización en la materia y sin militancia en Morena pero con vínculos con el empresariado. O por lo menos sin pruritos ideológicos de izquierda para la concertación con dicho sector.

Para el presidente, la mayor parte del empresariado es honesto, empeñoso, socialmente responsable, patriota y partidario del desarrollo en beneficio de la nación. No suele hacer críticas a la iniciativa privada, salvo a aquellos de sus integrantes que están en su contra o que fueron cómplices de actos ilícitos en el pasado. Para el presidente no hay una burguesía supranacional que incida de manera decisiva en el derrotero de la economía. Como tampoco una burguesía que sea responsable de la enorme pobreza y la marginación que viven millones de mexicanos. La desigual distribución de la riqueza es algo natural que irá disminuyendo mediante las transferencias económicas directas, un ingreso digno y el trabajo

---

<sup>5</sup> En los primeros dos años del gobierno, las principales empresas que “se pusieron al corriente” con el Sistema de Administración Tributaria, a pedido expreso del presidente López Obrador, fueron: BBVA, un banco de nivel internacional, 3,200 millones de pesos; FEMSA, propiedad del gran empresario José Antonio Fernández, 8,790 millones de pesos; el consorcio cibernético IBM- 669 millones de pesos; la cervecera transnacional Grupo Modelo, 2000 millones de pesos; Walmart, cadena de supermercados que es propiedad de uno de los multimillonarios más grandes del mundo, 8,000 millones de pesos; América Móvil, de Carlos Slim, 8,290 millones de pesos y Minera Fresnillo, perteneciente a la compañía minera Fresnillo PLC, la principal productora de plata del país, 4,900 millones de pesos (Forbes, 10 de septiembre de 2020).

fecundo, honesto y persistente de cada quien (trabajo que no necesariamente tiene que ser formal). Cabe recordar que durante la pandemia no hubo apoyos sociales nuevos o extraordinarios, sino que se mantuvieron los establecidos desde el principio del sexenio y solamente se adelantó la entrega de recursos o se incrementó su monto (aunque de manera apenas perceptible).

Hay opositores de la iniciativa privada al gobierno en organizaciones como el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA) o la coalición entre partidos y sociedad civil, Va por México. Pero resultan más llamativos los nexos cordiales que el gobierno sostiene con el sector privado.<sup>6</sup> Las organizaciones corporativas del gremio no han emitido ninguna crítica de peso a las decisiones gubernamentales más polémicas. Acaso la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha formulado críticas en materia de política social o respecto de la estrategia sanitaria y de salud por la pandemia. Pero no hay organismo empeñado en cuestionar el proceder gubernamental, ni mucho menos las empresas como tales. Esto implica una relación de conveniencia, porque los intereses más poderosos no han sido afectados en esencia (lo que se ve reflejado en que los ingresos de los sectores más adinerados no padecieron el impacto negativo de la pandemia, a diferencia de los sectores de menores ingresos) (CEPAL, 2021: 65). Ello revela, en el fondo, un pragmatismo elevado de parte del presidente y de su equipo gobernante.

### **El “gobierno del pueblo” y la concentración del poder**

La concentración del poder en el presidente es un rasgo característico del gobierno actual, pero no exclusivo. En la época de la hegemonía priísta, esto era lo normal. Asimismo, la lealtad hacia el titular del Poder Ejecutivo formaba parte de los requisitos para formar parte de la élite y sobre todo para tener posibilidad de sucederle en el cargo. Las directrices de la gestión pública son dictadas por López Obrador, y son respetadas y defendidas a pie juntillas, sean verdad o no, se puedan solventar con recursos escasos o abundantes, y sin importar que se trate de problemas complejos que exigen soluciones igualmente complejas. La autoridad presidencial se fundamenta en reglas escritas y no escritas que la alejan cada vez más de una legitimidad democrática, en otras palabras, de una toma de decisiones horizontal, colegiada,

---

<sup>6</sup> Sobre FRENAA, consultar a Ramírez Zaragoza (2021).

donde haya una participación más amplia del grupo gobernante e incluso de la misma sociedad. En esto el gobierno también es más conservador que transformador: conservador del hiperpresidencialismo y carente de una convencida política en pro de la participación ciudadana en la toma de decisiones; en otras palabras, de una democracia participativa y no únicamente electoral.

De hecho, el presidente ha descalificado a la “sociedad civil” porque, según su perspectiva, mediante ese término, con la conformación de asociaciones civiles de diverso tipo, se disfrazaron intereses de particulares que únicamente buscaban salvaguardar sus privilegios, practicar la corrupción, o simplemente vivir del erario.<sup>7</sup> El presidente canceló el financiamiento económico de muchas asociaciones, a partir de la disolución de más de cien fideicomisos que además se manejaban financieramente con poca transparencia.<sup>8</sup> Por lo mismo, el presidente no promovió espacios de participación de la sociedad civil, muchos de los cuales existían en la ley y en la práctica (como los consejos consultivos) (Insunza y Hevia, 2012). Si bien es cierto que su impacto era limitado, el presidente prefirió deshacerse de ellos en lugar de fortalecerlos. Es por todo ello que el trabajo de organismos de derechos humanos, de género, de atención a la infancia, de fiscalización o de rendición de cuentas han sido atacados en el discurso presidencial y mediante la supresión de recursos que legalmente eran canalizados para fortalecer su trabajo “desde abajo”.

Pese a todo, el presidente asegura que la democracia es más auténtica que nunca. Entre sus argumentos señala la posibilidad de revocación del mandato presidencial, la realización de consultas populares para decisiones polémicas y su personal convicción de ser la cabeza del “gobierno del pueblo”. La consulta popular existe en las leyes mexicanas desde 2014, aunque sólo como objeto decorativo (Reveles, 2018). El gobierno actual ha impulsado varias consultas para supuestamente tomar decisiones polémicas en el ámbito local. Las consultas nacionales han sido dos: una donde la intención era saber si la sociedad demandaba castigo a los delitos cometidos por los expresidentes desde 1988 (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto); la segunda fue sobre

---

<sup>7</sup> Esa es solamente una parte del complejo conjunto de organizaciones de la sociedad civil y de sus vínculos con el gobierno. Para ampliar el tema, cfr. Chávez y González, 2018.

<sup>8</sup> El decreto apareció el dos de abril de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2020). DOF - Diario Oficial de la Federación. Fueron 109 fideicomisos, de acuerdo con El universal, 8 de octubre de 2020. Estos son los 109 fideicomisos que desaparecen (eluniversal.com.mx)

la permanencia o no de López Obrador en el cargo. Ambas sirvieron principalmente para la promoción del liderazgo presidencial, la narrativa del gobierno de la 4T y la descalificación de los organismos electorales. Poco ayudaron para la rendición de cuentas o para el empoderamiento de la ciudadanía.

La defensa de la gestión gubernamental a toda costa es una tarea que el presidente cumple día a día desde sus conferencias matutinas. Su línea es, de igual manera, defendida por completo y sin matices por sus funcionarios públicos. Ya sea en sus respectivas gestiones o como parte de campañas por cargos públicos de elección, los liderazgos morenistas no hacen sino reivindicar al presidente y replicar sus ideas y sus políticas.

Como parte de este comportamiento (propio de cualquier élite política, no de una nueva o diferente, como pretende la 4T), cualquier cuestionamiento al presidente o a su gabinete es descalificado sin excepciones. Ningún crítico merece reconocimiento y mucho menos respeto. Por el contrario, el presidente de la República suele atacar a sus detractores una y otra vez, con todo el uso de su autoridad en los medios. Notimex, la empresa estatal de medios, ha sido acusada de dictar “línea” a los medios y padece un conflicto permanente debido a la incapacidad de su directora de llegar a acuerdos con los trabajadores. Los espacios mediáticos gubernamentales, como el Canal 22 o el Canal 11, diversas estaciones de radio y el periódico La Jornada, sancionan también a la oposición, sin dar pie al debate plural y respetuoso. Con ello contribuyen a una polarización inter élites que difícilmente representa un cambio y en nada contribuye al fortalecimiento de la democracia.

### **Los conservadores en el poder y la persistente corrupción**

Las críticas a integrantes de la 4T han sido desvirtuadas y desechadas por el presidente, no obstante los irregulares comportamientos de algunos de los más importantes personajes de su gobierno. Es probable que el más relevante sea el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre quien pesan acusaciones de uso de las leyes y el aparato institucional para resolver asuntos personales y atacar a sus enemigos en el ámbito personal o político. Asimismo, el fiscal fue acusado por recibir un trato preferencial en su evaluación para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sistema al que se le dio entrada con el máximo nivel de reconocimiento y de

estímulo económico, sin dedicarse de lleno a la ciencia, con dos rechazos previos y con denunciadas comprobadas de plagios en varias de las obras publicadas que presentó para su evaluación (Roldán, 2022).

Una de las acusaciones más importantes hacia Gertz provinieron del mismo equipo gobernante. Quien fuera el abogado general de la presidencia en los primeros tres años del sexenio, Julio Scherer, ya fuera del gobierno, le acusó de manipular las leyes y la fiscalía a su conveniencia, de ignorar sus directrices y recomendaciones hacia el trabajo del fiscal y de orquestar una campaña en su contra. El presidente se deslindó de la disputa y abogó por su resolución. Pese a todas las denuncias en su contra, Gertz continuó firme en su cargo (Scherer, 2022).

Otro de los funcionarios más cuestionados ha sido el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Expriísta y Secretario de Gobernación en la administración del presidente más neoliberal de nuestra historia (Salinas de Gortari, 1988-1994), Bartlett entabló una sólida relación con el presidente, quien lo ha defendido de todas las denuncias de corrupción, enriquecimiento inexplicable y de su responsabilidad en el fraude electoral en la elección presidencial de 1988. Bartlett niega cualquier acto de corrupción de su parte y se ha deslindado del neoliberalismo y del fraude, responsabilizando a Salinas de Gortari de todo ello. Sin embargo, los cuestionamientos son demasiado serios como para ser ignorados.

De los integrantes de gabinete, quien ha sido también muy controvertido ha sido el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, por lo que muchos consideran como incorrecto manejo de la estrategia gubernamental contra la pandemia. Su exposición mediática fue permanente, primero en las conferencias matutinas y después en conferencias vespertinas expresamente para la información de salud. Los detractores y especialistas vertieron infinidad de críticas que sacaron como conclusión que México estaba entre los países con una estrategia menos eficaz para enfrentar el terrible mal.<sup>9</sup>

No todos los cuestionamientos han tenido fundamento, pero sirvieron para la lucha política de conservadores y transformadores. También declaraciones subjetivas del subsecretario sirvieron para cuestionar su gestión. Una de las más burdas, la que insinuó la

---

<sup>9</sup> Una crítica notoriamente parcial fue la de exsecretarios de salud, es decir, de los responsables de la precariedad del sistema (La octava, 10 de septiembre de 2020).



politización de la demanda de medicamentos para niños con cáncer; la más reciente, cuando descalificó las consultas de médicos particulares que trabajan en las cadenas farmacéuticas. Los ataques llevaron al subsecretario a asegurar que todo se trataba de una estrategia de “golpe de estado blando”, lo que restó credibilidad a quienes cuestionaban la política de salud del gobierno de la 4T (entre quienes incluyó no sólo representantes de partidos, sino de médicos y científicos especializados en la materia).<sup>10</sup>

Las denuncias de presuntos actos de corrupción de parte de representantes de la 4T han sido descalificadas por el presidente y por las dependencias gubernamentales encargadas de su investigación y, en su caso, de su sanción. Por principio de cuentas, el gobierno no reconoce legitimidad alguna a quienes emiten las denuncias. Todas las voces críticas son echadas al mismo saco, al mismo bloque del conservadurismo, y a su vez acusadas de lo mismo que critican. O bien se les recuerda que, desde la perspectiva del gobierno, nunca antes habían denunciado el irregular proceder de los gobiernos anteriores (que sí eran corruptos). De este modo, para defenderse, el gobierno usa el mismo recurso que sus críticos: la mentira.

Varios de los integrantes del gabinete han sido acusados por lo menos de enriquecimiento inexplicable, como consta con los ya mencionados Bartlett y Gertz. Asimismo, no pocos de los funcionarios públicos tienen un patrimonio generoso, que se percibe extraño por ser integrantes de un gobierno austero, republicano y de izquierda. Si bien ninguno de ellos es por el momento acusado de enriquecerse a partir del erario, en otros espacios la corrupción persiste. De ese modo, de nuevo se pone en tela de juicio el “no somos iguales” que el presidente no se cansa de pronunciar.

Las élites políticas de hoy se resisten a perder sus privilegios del pasado. Aunque el poder ejecutivo impuso una política de austeridad que, por principio de cuentas, dispuso una reducción a los salarios de la burocracia en la cual el tope máximo debiera de ser el del presidente de la República, el comportamiento austero de las élites políticas no se ha generalizado. Hay además integrantes del gabinete que, de suyo, tienen ingresos elevados

---

<sup>10</sup> La referencia al golpe de estado blando fue hecha por López Gatell en el programa televisivo de caricaturistas de La Jornada, “El Chamuco TV”: “Me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta... este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica con golpe de Estado, y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos más como una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando esta ola de simpatía de la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista” (El Universal, 29 de junio de 2021).

por otras fuentes, por lo que la medida no tiene afectación a su patrimonio, pero no es lo que sucede con la mayoría de la burocracia.<sup>11</sup>

Pese a que, desde su punto de vista, la corrupción es la causa de la desigualdad social y que el presidente la ha colocado como una de sus prioridades desde el principio de su gestión, sigue siendo practicada por los gobernantes. La frase de “no somos iguales” no es cumplida al cien por ciento por parte de los integrantes del gobierno de la Cuarta Transformación porque hay acusaciones y hechos que así lo demuestran. Dos hermanos del presidente han sido denunciados mediante videos donde reciben dinero de parte de particulares, lo que se ha justificado como apoyos de simpatizantes para las campañas electorales de Morena. A la fecha, la autoridad electoral sigue investigando si los apoyos siguieron las pautas legales, pero queda la duda sobre quiénes entregaron el dinero, en qué momento lo hicieron y a cambio de qué.

Funcionarios en el ejercicio de sus funciones han sido denunciados por comportamientos irregulares, en el pasado o en la actualidad. El caso más sonoro fue el de la ex secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quien fue corresponsable del cobro del llamado “diezmo” (una parte de sus ingresos salariales) a los trabajadores durante su administración municipal en Texcoco, Estado de México, para financiar a Morena.<sup>12</sup> El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso una sanción por cuatro millones y medio de pesos al partido y no a alguno de los funcionarios involucrados (incluyendo a la alcaldesa). Un hecho similar ocurrió en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dependencia encargada de las políticas hacia la

---

<sup>11</sup> En 2021, el presidente de la República obtuvo ingresos por un millón 628 mil pesos, pero varios de sus colaboradores sumaron montos mucho mayores: el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tuvo ingresos por 5 millones 768 mil pesos; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dos millones 931 mil pesos; el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dos millones 98 mil pesos; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, acumuló casi dos millones; el secretario de Turismo, Miguel Torruco, un millón 938 mil. Cfr. Flores, 2022. En 2019, algunos de los secretarios dieron a conocer montos mucho mayores: la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 10 millones 688 mil (debido en gran medida a su pensión como ministra de la SCJN en retiro) y el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tuvo 7 millones 164 mil pesos (Infobae, 22 de junio de 2020).

<sup>12</sup> A principios de 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el siguiente comunicado: “La Sala Superior del TEPJF confirmó, por unanimidad de votos de los presentes, la sanción de 4 millones 529 mil pesos impuesta al partido político Morena por haber omitido el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015, a partir de la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias, mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de ese municipio, por un monto acreditado de 2 millones 264 mil 612 pesos.” (TEPJF, 2022).

infancia, donde la directora Rocío García Pérez (de diciembre de 2018 a enero de 2022) fue denunciada por el cobro ilegal de un porcentaje del salario de sus empleados, supuestamente para complementar el presupuesto de la dependencia (Roldán, 2021).

Más allá de las denuncias de fraude, las declaraciones patrimoniales de los integrantes del gobierno son evidencia de una condición social acomodada, en algunos casos notoriamente privilegiada, que parece entrar en contradicción con la idea presidencial de “por el bien de todos, primero los pobres”. Son los casos de quien fuera abogado jurídico de la presidencia, Julio Scherer, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero y el fiscal general, Alejandro Gertz. Éste último, además, pese a su notable patrimonio, recibe una beca del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT; es el mismo caso del secretario de Salud, Jorge Alcocer (para el cual dicha beca equivale a la cuarta parte de sus ingresos anuales). Asimismo, los legisladores federales no han disminuido sus privilegiadas condiciones laborales al máximo, lo que los sigue colocando como un sector con ingresos muy superiores a los de la mayoría de los trabajadores de la nación. Según datos del INEGI (2022), mientras que el salario mínimo es de 5 mil 186 pesos (que es percibido por un tercio de los trabajadores mexicanos),<sup>13</sup> los diputados ganan 75 mil pesos al mes, reciben casi 46 mil pesos por “asistencia legislativa” y 28 mil 772 pesos por “atención ciudadana”; los senadores tuvieron un salario de 105 mil 600 pesos y apoyos similares. Se critica mucho a los integrantes de los órganos autónomos o de las autoridades electorales por la misma causa, pero no han existido acciones o medidas contundentes de disminución de los ingresos de diputados federales y senadores. Por ello la disputa de espacios directivos en las cámaras persiste, ya que los ingresos y privilegios aumentan si se ejercen tales tareas.

## **La nueva moral y los derechos de género y de la diversidad sexual**

Otra faceta en la que se reflejan las posturas conservadoras dentro de la Cuarta Transformación es un conjunto de posiciones ideológicas que se refieren a las mujeres, su papel en la sociedad, sus derechos y los de la comunidad de la diversidad sexual. Como se

---

<sup>13</sup> En realidad, el dato es más grave, ya que dos tercios PEA percibió no más de dos salarios mínimos mensuales (es decir, no más de 10 mil 372 pesos) (INEGI, 2022: 7).

sabe, a este gobierno le tocó enfrentar las movilizaciones feministas derivadas de una gran irrupción de las mujeres en el mundo, en busca de denunciar principalmente la violencia sexual. El presidente puso en duda su legitimidad, acusando intereses extraños detrás de las acciones, particularmente cuando afectaban el transporte público o las vías de comunicación. Pero las movilizaciones no cesaron, ni siquiera durante el confinamiento derivado de la pandemia. Ante su persistencia, el presidente exaltó el hecho de que hubiera muchas mujeres en su gabinete, particularmente en secretarías de estado. Todas ellas, en su momento, presentaron un programa con todas las políticas de género del gobierno. Tal programa era la suma de acciones y políticas que las distintas dependencias ya instrumentaban, la mayoría de ellas consistentes en políticas sociales, en materia de salud y de prevención y combate a la violencia.

Sin embargo, el presidente López Obrador sostiene posturas conservadoras respecto de género desde hace mucho tiempo. Estas se revelan en su concepción sobre el papel de la mujer en la sociedad: por ejemplo, cuando hace referencia a las madres como quienes tienen la tarea de encauzar a la juventud por un camino distante de la criminalidad o de las adicciones; también cuando se dice convencido de que la familia es el núcleo esencial para el ser humano, porque es el espacio más armonioso y seguro, donde se recibe una óptima educación y la mejor salud. De ese modo, según su percepción, la cancelación del financiamiento para estancias infantiles (decretada a principios del sexenio) no causaba problemas porque devolvía a las jefas de familia su rol como las mejores educadoras o cuidadoras de la niñez. Las cifras oficiales de aumento de la violencia intrafamiliar durante el confinamiento fueron desacreditadas por el presidente, quien se resiste a creer que el seno familiar sea un espacio inseguro para niñas y esposas. Asimismo, para el titular del Ejecutivo, un recurso para combatir al narcotráfico siempre ha sido la educación familiar y en especial el papel de las madres para la formación de valores como la honradez, la lealtad y la bondad. Hubo por lo menos dos actitudes reveladoras de esta postura de parte del presidente: el saludo de mano que le concedió a la madre del “Chapo” Guzmán, uno de los principales líderes del narcotráfico, y la celebración del día de las madres en sus conferencias matutinas.

Los derechos de la diversidad sexual es un tema que el presidente suele evadir. Desde su gestión como Jefe de Gobierno de la CDMX, cuando se discutió la despenalización del aborto, López Obrador evitó comprometerse con una postura progresista y propuso consultar

a la sociedad sobre el tema. Cada vez que han surgido banderas de igualdad de género o en materia de diversidad sexual, sostiene la misma propuesta. El presidente justifica su ambigüedad al afirmar que en la sociedad hay diferentes opiniones que deben ser respetadas. Pero al final, dicho respeto debe pasar la prueba de las urnas.<sup>14</sup>

Esta posición es contradictoria con la pretensión protohegemónica que el presidente ha sostenido al proponer la socialización de nuevos valores mediante el sistema educativo y a través de la llamada “Cartilla moral” (Reyes, 2018) y después con la “Guía ética para la transformación de México” (varios autores, 2021), documentos que el gobierno distribuyó masivamente en el sistema educativo y también casa por casa. El primero fue una actualización de un antiguo documento del intelectual mexicano Alfonso Reyes, el segundo fue redactado por un equipo de asesores del presidente, quienes retomaron sus ideas y trataron de darles una argumentación más elaborada. Sus líneas principales refieren a valores de carácter universal, no expresan una postura ideológica de izquierda moderna o novedosa, ni definen un horizonte de futuro para la humanidad ni para la sociedad mexicana. De acuerdo con su enfoque, el amor al prójimo es sustento para la felicidad, sin que importe la condición social de desigualdad ni tampoco la desigualdad de género. El bienestar del ser humano no puede basarse en valores materiales sino espirituales, que de manera natural provienen de la familia. El ser humano es bueno por naturaleza, pero corre el riesgo de pervertir su condición al reproducir valores que lo alejen del bien común. La protección, la educación, la felicidad del seno familiar debe ser respetada, cultivada y fortalecida por el gobierno, de tal manera que la felicidad sea alcanzada por todos.

La cartilla da por un hecho la desigualdad social. No parte de la existencia de la propiedad en unas cuantas manos como el origen de la explotación social y, por lo tanto, de la pobreza y la riqueza. El presidente ha reiterado su posición respecto de que el origen de la pobreza es la corrupción. Al hacerlo, desplaza las causas sociales y económicas por una razón cuyo origen es el valor del dinero y el espíritu individualista de los sujetos, especialmente de quienes se encuentran en el gobierno. En otras palabras, la condición social se deriva de una decisión personal y no de procesos en efecto sociales o de carácter estructural. Porque la corrupción es un problema de las élites políticas del pasado, que contribuyó a la situación de marginación que se vive en la actualidad. El empresariado que se coludió con estos

---

<sup>14</sup> La última vez que señalo eso fue en 2020, como se lee en la nota de García (2020) en El País.

gobernantes corruptos también se pervirtió, pero desde la perspectiva del gobierno, la responsabilidad principal recae en el funcionariado público. No es gratuito, puesto que se formaron y reprodujeron los principios del neoliberalismo, que son el individualismo y el materialismo.

### **La amenaza de la militarización**

Finalmente, un elemento más que se debe considerar en esta evaluación sobre los signos de conservadurismo en la 4T es el creciente peso de las fuerzas armadas en el ejercicio del poder. Con base en una indiscutible violencia generada por la delincuencia organizada (principalmente los cárteles de la droga) y en parte también por medidas erróneas tomadas por gobiernos anteriores, la administración actual concretó la conformación de la llamada Guardia Nacional, un cuerpo especializado de seguridad que se hiciera cargo de las tareas que policías estatales o municipales han dejado de realizar. Como el problema es imparable, el ejército y la marina han tenido que participar con mucha visibilidad. Recientemente, por iniciativa presidencial, el Congreso de la Unión ha decidido que la Guardia Nacional tenga mando militar y no civil, como originalmente se había establecido. Y finalmente el gobierno logró el apoyo del PRI para legalizar la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública (hasta 2028, según el dictamen aprobado por la cámara de diputados).

Es importante señalar que la represión por parte de estos cuerpos e instituciones no es un hecho cotidiano. La coerción se ha orientado a contrarrestar las movilizaciones de inmigrantes en la frontera norte y sobre todo en la sur. Y de algún modo los militares han participado para contener acciones de disidencias locales, sin que se sepa de manera fehaciente si hay encarcelamientos, desapariciones, tortura o asesinatos en contra de quienes participan. Pero las cifras oficiales son dudosas: por ejemplo, es sorprendente que ninguna de las más de mil denuncias presentadas en contra de elementos de la Guardia Nacional haya prosperado.

Por otro lado, si bien no hay cuadros del ejército en otras secretarías del gabinete, ni en mandos altos o medios, el presidente ha concedido más atribuciones a las fuerzas armadas al hacerlas responsables directas de la construcción y operación del viejo aeropuerto internacional Benito Juárez y del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, del tren

maya y de 2 mil 744 sucursales del Banco del Bienestar (la institución financiera estatal); también se hace cargo de los gastos de la Guardia Nacional y de la la Agencia Nacional de Aduanas de México. Gracias a ello, en el 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina estarán manejando el doble del presupuesto que tuvieron en 2018.<sup>15</sup> Algo que ninguna secretaria de Estado ha experimentado ni en este, ni en sexenios anteriores.

Por último, cabe señalar que el discurso presidencial no deja de ser intolerante y amenazador (o sea coercitivo) para cualquier crítica lanzada por periodistas, intelectuales o representantes de algún partido opositor. La violencia verbal forma parte de las conferencias matutinas y es reproducida por militantes y simpatizantes del partido gobernante, lo que constituye un grave riesgo si llegara a escalar en enfrentamientos físicos en procesos electorales o en movilizaciones sociales.

## **Conclusiones**

En suma, hay un conservadurismo entre los integrantes del gobierno de la Cuarta Transformación, incluso en el propio presidente de la República. El peso de todos los elementos constituye una carga enorme que está definiendo los límites del proyecto de cambio de los gobernantes. La transformación no está pasando por la modificación de fondo del modelo económico, que abarcaría una reforma fiscal para gravar la riqueza, establecer formas de propiedad diferentes y organizar las empresas y fábricas con la participación de los trabajadores, ni tampoco se está instrumentando nuevas formas de representación política con participación directa y cotidiana de la ciudadanía en la toma de decisiones, desde el ámbito local hasta el nacional.

El conservadurismo se expresa en la confianza de los integrantes y simpatizantes del gobierno de la 4T en que la concentración del poder en un líder noble, bondadoso, honrado, responsable y solidario es la fórmula para la solución de los problemas de la nación. La división de poderes es irrelevante, como también los organismos de rendición de cuentas. La explotación social es un hecho natural, que será resarcido por las políticas gubernamentales adecuadas. La mujer tiene una función social primordialmente como madre. En materia de

---

<sup>1515</sup> “Ambas secretarías pasarían de disponer recursos por 112 mil 327 millones de pesos en programas presupuestarios a 226 mil 309 millones (en 2023), un incremento nominal de 101 por ciento y 54.8 por ciento en términos reales, descontando a la inflación”. La jornada, 18 de septiembre de 2022, p. 17.

educación y salud, no hay mejor institución que la familia, donde la mujer es capaz de hacer grandes aportaciones a la sociedad.

En general, desde la perspectiva del gobierno, las críticas a su bienintencionada gestión son injustas, parciales, interesadas y prejuiciosas. Por ello no es posible establecer un diálogo con quienes tienen una posición diferente. Aunque esto no es evidencia necesariamente de una postura conservadora, sí es poco democrática, porque además el gobierno reacciona generalmente con un discurso intolerante. La represión no es una práctica común, pero el crecimiento de las funciones de las fuerzas armadas se percibe como una amenaza para todos en general y para la disidencia en particular.

### **Fuentes consultadas**

Araníbar, Antonio y Benjamín Rodríguez (coords.) (2013), *América Latina, ¿del neoliberalismo al neodesarrollismo?*, Buenos Aires, Siglo XXI. PNUD, Cuadernos de prospectiva política núm. 3.

BBC Mundo (16 de julio de 2019), “Alfonso Romo, el millonario y mano derecha de AMLO detrás de la renuncia del exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa”, disponible en: <https://acortar.link/y3bMYI>

Bobbio, Norberto y Nicola Matteucci (1988), *Diccionario de política*, México, Siglo XXI, dos tomos.

Bolívar, Rosendo (2019), “Desdibujamiento ideológico y pragmatismo. Morena en la coalición Juntos Haremos Historia, durante el proceso electoral de 2018”, en *Revista Mexicana de Opinión Pública*, México, FCPS-UNAM, Núm. 27, julio-diciembre, pp. 61-76.

CEPAL (2021), *Panorama social de América Latina 2021*, Santiago, CEPAL-ONU, 247 p.

Coraggio, José Luis (2014), “Otra política, otra economía, otras izquierdas”, en: Coraggio, José Luis y Jean-Lois Laville (eds.) (2014), *Reinventar la izquierda en el siglo XXI. Hacia un diálogo Norte-Sur*, Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento, Icaria, pp. 27-56.

Chávez Becker, Carlos y Pablo Armando González Ulloa (2018), *Las organizaciones de la sociedad civil en México. Hacia una reforma de la Ley*, México, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, 148 p.



El Universal (29 de junio de 2021). “López-Gatell acusa distorsión de dichos sobre niños con cáncer y golpe de Estado”. Disponible en: <https://acortar.link/4d1oxH>

Expansión (19 de abril de 2021), “¿Cómo va el tramo del Tren Maya a cargo de la empresa de Carlos Slim?”. Disponible en: <https://acortar.link/MfKSbH>

Flores, Linaloe (2022), “Declaraciones patrimoniales: 13 funcionarios perciben más ingresos que AMLO”. *Expansión política*, 30 de mayo. Disponible en: <https://acortar.link/LsU2V5>

Forbes (10 de septiembre de 2020), “BBVA, FEMSA y Walmart se cuadran ante el SAT: pagan 35,000 mdp de impuestos atrasados”. Disponible en: <https://acortar.link/91Xhv2>

García, Jacobo (31 de diciembre de 2020), “López Obrador propone que el aborto se decida en una consulta pública”. *El país*. Disponible en: <https://acortar.link/SjsHMK>

INEGI (2022) “Indicadores de ocupación y empleo. Enero de 2022”, México, INEGI, *Comunicado de prensa 133/22*, 28 de febrero. Disponible en: <https://acortar.link/vcGIjs>

Infobae, 22 de junio de 2020, “Olga Sánchez Cordero aumentó su patrimonio cinco veces por encima de su sueldo como secretaria de Estado”. Disponible en: <https://acortar.link/6Yb0mU>

Insunza, Ernesto y Felipe Hevia (2012), “Participación acotada: consejos consultivos e incidencia en políticas públicas en el ámbito federal mexicano”, en Cameron, Maxwell et al. (eds), *Nuevas instituciones de democracia participativa en América Latina: la voz y sus consecuencias*, FLACSO, México.

La octava (10 de septiembre de 2020), “Exsecretarios de Salud de Fox, Calderón y EPN critican estrategia de López-Gatell contra la pandemia”. Disponible en: Exsecretarios de Salud de Fox, Calderón y EPN critican estrategia de López-Gatell contra la pandemia | La Octava

La silla rota (26 de octubre de 2021), “Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego. ¿Quién es quién en contratos con la 4T?”. Disponible en: <https://acortar.link/3o5Wum>

López Obrador (2022), <https://acortar.link/ICRolb>

López Obrador (2022a), <https://lopezobrador.org.mx/temas/consejo-asesor-empresaria/>

Ramírez de Garay, Iván (2008), *El lenguaje de la derecha radical europea*, México, El Colegio de México.

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (2021), “El FRENAA y la derecha como oposición: un análisis de la coyuntura electoral 2021”, en *El cotidiano*, México, UAM Azcapotzalco, núm. 229, septiembre-octubre, pp. 71-82.

Reveles, Francisco (2018), “Normas ilusorias del régimen político mexicano: los mecanismos de democracia participativa”, en *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, México, SOMEE, Núm. 20, segundo semestre, julio-diciembre, pp. 49-76.

Reyes, Alfonso (2018), *Cartilla moral*, México, Gobierno de México, actualización de José Luis Martínez, 30 p. Disponible en: <https://acortar.link/svTI20>

Roldán, Nayeli (3 de mayo de 2021). “Directora del DIF obliga a empleados a darle hasta 4% de sus salarios; la SFP lo sabe desde julio”. Disponible en: <https://acortar.link/fUNDZy>

Roldán, Nayeli, (10 de marzo de 2022), “CONACyT desecha la denuncia de plagio contra Gertz”, en: *Animal político*, México, Disponible en: <https://acortar.link/LL9Qry>

Scherer, Julio (2022), “Scherer acusa trama ‘perversa’ de Gertz y Sánchez Cordero”, en *Proceso*, México, semanario político. Disponible en: *Scherer acusa trama "perversa" de Gertz y Sánchez Cordero – Proceso*

TEPJF (2022), “El TEPJF confirma la sanción a MORENA por el esquema de financiamiento con recursos de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México”. Sala Superior, 4/222. Disponible en: <https://acortar.link/IjKVS7>

Varios autores (2021), *Guía ética para la transformación de México*, México, Gobierno de México, 34 p. Disponible en: <https://acortar.link/t6VPHb>